


Concepto Comité de Conciliación - Proceso 15001310500120230000900

DEFENSA COLPENSIONES <defensacolp.j1lct@gmail.com>

Lun 11/03/2024 8:50

Para: Juzgado 01 Laboral Circuito - Boyacá - Tunja <j01lctotun@cendoj.ramajudicial.gov.co>

 1 archivos adjuntos (179 KB)

{EC613578-5ED2-477D-9230-F678A1C17657}.pdf;

Buenos días,

Reciba un cordial saludo, por medio del presente me permito de aportar concepto emitido por el Comité de Conciliación y Defensa Judicial de la Administradora Colombiana de Pensiones – Colpensiones donde se toma una decisión dentro proceso de la referencia, con el fin que sea incorporado al expediente y sea tomada en cuenta en el momento procesal oportuno.

Atentamente,


ELBER FRANCISO REYES BUITRAGO

C.C. 1.052.399.694 de Duitama

T.P. 330.859 del C.S. de la J.

ABOGADO EXTERNO COLPENSIONES

SOLUCIONES JURÍDICAS DE LA COSTA S.A.S REGIONAL CENTRO

	Certificación de la Secretaria Técnica del Comité de Conciliación y Defensa Judicial		CÓDIGO:	
			VERSIÓN:	
			FECHA:	

CERTIFICACIÓN NO. 062992023

La Secretaria Técnica del Comité de Conciliación y Defensa Judicial

CERTIFICA


Que tal y como consta en el Acta No. 073-2023 del 05 de mayo de 2023 del Comité de Conciliación y Defensa Judicial de la Administradora Colombiana de Pensiones COLPENSIONES, respecto del caso **LUIS EDUARDO MALDONADO MORENO** identificado(a) con cédula de ciudadanía No **4280283**, en proceso bajo radicado No **15001310500120230000900**, quien pretende; declare la ineficacia y /o nulidad del traslado del RPM al RAIS y como consecuencia de ello se ordene a Colpensiones a recibir los aportes provenientes de la AFP y afiliar nuevamente a la demandante en el RPM, dicho órgano decidió de manera unánime:

NO proponer fórmula conciliatoria, en consideración a lo siguiente:

No se propone fórmula conciliatoria para el caso objeto de estudio, pues debemos tener en cuenta que no es procedente declarar la nulidad de la afiliación realizada por el accionante del Régimen de Prima Media al Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad y condenar a mi Representada a recibir los aportes y activar la afiliación del mismo en el Régimen de Prima media, teniendo en cuenta las siguientes consideraciones:

Existe legalidad del traslado del Régimen de Prima Media al Régimen al de Ahorro Individual, teniendo en cuenta que el traslado se realizó con plena voluntad del cotizante, quien por decisión propia solicitó el traslado suscribiendo el formulario de afiliación con la A.F.P COLFONDOS S.A en enero de 1995 posteriormente realiza traslado horizontal a PORVENIR S.A en el mismo año luego en el año del 2000 se traslada nuevamente a COLFONDOS S.A para finalmente en el año 2015 trasladarse a PROTECCION S.A, Por tanto, debe señalarse que tal traslado fue totalmente válido, puesto que no se configuraron vicios de consentimiento en la suscripción de la afiliación, vicios que se estipulan en el artículo 1109 del código civil, los cuales son: error, dolo, violencia, lesión o incapacidad al momento de suscribir en un primer momento el formulario de traslado PROTECCION S.A a la que actualmente se encuentra vinculada y cotizante.

Así mismo, se encuentra acreditado que la parte actora suscribió los referidos formularios de afiliación de manera libre, espontánea y voluntaria, situación que acredita que no existió nulidad alguna que en este momento se pretende hacer valer, como quiera que si la parte demandante no estaba conforme con los lineamientos del RAIS ésta debió permanecer para aquella data en el Régimen de Prima Media administrado por COLPENSIONES, pero en contrario sensu, LUIS EDUARDO MALDONADO MORENO, permaneció en dicho régimen en las AFP mencionadas, situación que conlleva a presumir que la parte actora contaba con la información necesaria sobre las condiciones, características, modalidades y desventajas del régimen que gobernaría su futuro derecho pensional como se evidencia, puesto que no obra prueba dentro del acervo que permita inferir lo contrario, confirmando así su voluntad de permanencia en el RAIS, al decidir continuar afiliada al mismo por

	Certificación de la Secretaría Técnica del Comité de Conciliación y Defensa Judicial		CÓDIGO:	
			VERSIÓN:	
			FECHA:	

más de 20 años, acatando y sometiéndose a las consecuencias o manejo de sus aportes al arbitrio del Régimen de Ahorro Individual y de las AFP referida.

Por su parte el Decreto 692 de 1994 en su artículo 11 establece que la selección del régimen pensional implica la aceptación de las condiciones propias de este para acceder a las prestaciones de invalidez, vejez o muerte. Señala la norma anterior, los requisitos de forma que debe contener el formulario que se debe diligenciar para adelantar el proceso de vinculación con la respectiva administradora. Y finalmente, establece que cuando el afiliado que se traslade por vez primera del RPM al RAIS, en el formulario deberá consignarse que la decisión de trasladarse al régimen seleccionado se ha tomado de manera libre, espontánea, sin presiones y además autoriza la norma a que el formulario contenga leyenda impresa en este sentido. Requisitos que se acreditan en el formulario de afiliación suscrito por la parte accionante, razón por la que se encuentran acreditados los requisitos de validez del acto jurídico de traslado de régimen.

Aunado a lo anterior debe tenerse en cuenta que la regulación legal que fundamenta el RAIS se encuentra plasmada en la ley de la Seguridad Social a partir del artículo 59, norma que debe conocer toda persona del territorio nacional, misma que no debe ser desconocida por cuanto el desconocimiento de la norma no exime de responsabilidad alguna, lo que se traduce al artículo 1159 del Código Civil, puesto que no se configuraría un error de derecho, pues la norma es expresa al prescribir los lineamientos y funcionamientos tanto del RAIS, como del RPM.

En concordancia con lo expuesto se encuentra que la accionante no solo tenía el deber de conocer la norma de carácter nacional que regula el régimen pensional, sino que adicionalmente tenía deberes como consumidor financiero del Sistema General de Pensiones, al respecto señala el Artículo 2.6.10.1.4 del Decreto 2550 de 2010 (Artículo 4 del Decreto 2241 de 2010). En lo referente a los deberes los siguientes:


“1. Informarse adecuadamente de las condiciones del Sistema General de Pensiones, del nuevo sistema de administración de multífidos y de las diferentes modalidades de pensión.

2. Aprovechar los mecanismos de divulgación de información y de capacitación para conocer el funcionamiento del Sistema General de Pensiones y los derechos y obligaciones que les corresponden.

3. Emplear la adecuada atención y cuidado al momento de tomar decisiones, como son entre otras, la afiliación, el traslado de administradora o de régimen, la selección de modalidad de pensión y de entidad aseguradora que le otorgue la renta vitalicia o la elección de tipo de fondo dentro del esquema de “Multífidos”, según sea el caso.

(...)

4. Leer y revisar los términos y condiciones de los formatos de afiliación, así como diligenciar y firmar los mismos y cualquier otro documento que se requiera dentro del Sistema General de Pensiones, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 25 del decreto 692 de 1994 y las normas que lo modifiquen o sustituyan.

	Certificación de la Secretaria Técnica del Comité de Conciliación y Defensa Judicial		CÓDIGO:	
			VERSIÓN:	
			FECHA:	

5. Las decisiones que se tomen dentro del Sistema General de Pensiones, manifestadas a través de documentos firmados o de otros medios idóneos autorizados para ello, implicarán la aceptación de los efectos legales, costos, restricciones y demás consecuencias derivadas de las mismas.” (...)


Teniendo en cuenta lo anterior en el caso concreto materia del litigio se encuentra que no medió por parte del accionante LUIS EDUARDO MALDONADO MORENO, alguna solicitud de información que hiciera sobre su futuro pensional durante su vida laboral ya que no obra alguna dentro del acervo probatorio, sustrayéndose así de sus deberes como afiliado al sistema general de pensiones y convalidando su deseo de permanencia en el RAIS, al efectuar periódicamente las cotizaciones, sin presentar solicitud de traslado al Régimen de prima Media, desde enero de 1995, momento a partir del cual se encuentra válidamente en el RAIS.

Ahora bien, debe señalarse que el artículo 2º de la Ley 797 de 2003 establece la libre escogencia entre regímenes pensionales y también la posibilidad de trasladarse una vez cada cinco años contados a partir de la selección inicial, sin embargo, por razones financieras y de estabilidad en el sistema pensional, esta misma norma limitó este derecho cuando al afiliado le faltare 10 años o menos para alcanzar la edad de pensión, salvo los afiliados que tuvieran 15 años cotizados a la entrada en vigencia del Sistema general de pensiones, para quienes se conservó el derecho a regresar al Régimen de Prima Media en cualquier momento. Sobre el particular la Corte Constitucional en la Sentencia C-1024 de 2004 sostuvo lo pertinente en la sentencia C- 062 de 2010, en dichos fallos manifestó:

“El objetivo perseguido con el señalamiento del periodo de carencia en la norma acusada consiste en evitar la descapitalización del fondo común del régimen solidario de prima media, que se produciría si se permitiera que las personas que no han contribuido al fondo común y que por lo mismo no fueron tenidas en consideración en la realización del cálculo actuarial para determinar las sumas que representarían en el futuro el pago de sus pensiones y su reajuste económico, pudiesen trasladarse de régimen cuando estuviesen próximos al cumplimiento de los requisitos para acceder a la pensión de vejez, lo que contribuiría a desfinanciar el sistema y por ende poner en riesgo la garantía del derecho irrenunciable a la pensión del resto de cotizantes”

Conforme a lo anterior se encuentra que en el presente caso la parte actora se encuentra inmersa dentro de la prohibición del traslado como quiera que se encuentra a menos de 10 años del cumplimiento del requisito de edad y por lo tanto no es viable su retorno al régimen de prima media, en los términos que fue manifestado por mi defendida en las respuestas a las solicitudes presentadas.

Así mismo, el extremo demandante asegura que su afiliación al RAIS, se realizó con información errónea, por lo cual no logró tomar una decisión adecuada manifestando la falta de información, voluntad y conciencia de realizar estos actos que irradian legalidad al no demostrarse, vicios del consentimiento, dolo o error al momento de suscribirlos, y que en todo caso debe entenderse que dicha prohibición de trasladarse cuando faltaren menos de 10 años para adquirir el estatus de pensionado, solo se decretó con la expedición de la ley 797 de 2003, y la demandante decidió

	Certificación de la Secretaria Técnica del Comité de Conciliación y Defensa Judicial		CÓDIGO:	
			VERSIÓN:	
			FECHA:	

trasladarse antes de la expedición de esta Ley, y siendo una norma de alcance Nacional era su deber conocerla, por lo que no hay lugar a declarar la nulidad del traslado efectuado.


Se encuentra que el establecimiento de tal prohibición tiene como sustento la salvaguarda de los principios que regulan el sistema de seguridad social, tales como el de sostenibilidad del sistema pensional, atendiendo a que, de accederse a las pretensiones de la demanda, se estaría permitiendo el traslado de una cotizante que ya tiene la edad para adquirir el status de pensionada. Al respecto se ha pronunciado la Corte Constitucional en Sentencia C-1024/04, M.P. Dr. RODRIGO ESCOBAR GIL, así:

“La medida prevista en la norma acusada, conforme a la cual el afiliado no podrá trasladarse de régimen cuando le faltaren diez (10) años o menos para cumplir la edad para tener derecho a la pensión de vejez, resulta razonable y proporcional, a partir de la existencia de un objetivo adecuado y necesario, cuya validez constitucional no admite duda alguna. En efecto, el objetivo perseguido por la disposición demandada consiste en evitar la descapitalización del fondo común del Régimen Solidario de Prima Media con Prestación Definida, y simultáneamente, defender la equidad en el reconocimiento de las pensiones del Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad, pues se aparta del valor material de la justicia, que personas que no han contribuido a obtener una alta rentabilidad de los fondos de pensiones, puedan resultar finalmente beneficiadas del riesgo asumido por otros. La validez de dicha herramienta legal se encuentra en la imperiosa necesidad de asegurar la cobertura en la protección de los riesgos inherentes a la seguridad social en materia pensional a todos los habitantes del territorio colombiano, en acatamiento de los principios constitucionales de universalidad y eficiencia (C.P. art. 48). Así mismo, el objetivo de la norma se adecua al logro de un fin constitucional válido, pues permite asegurar la intangibilidad de los recursos pensionales en ambos regímenes, cuando se aproxima la edad para obtener el reconocimiento del derecho irrenunciable a la pensión, en beneficio de la estabilidad y sostenibilidad del sistema pensional.”

Por otro lado, reitero que imperioso resulta manifestar para el caso en concreto, que la honorable Corte Constitucional, mediante sentencia C-993 de 2006, al realizar un exhaustivo estudio de constitucionalidad de los artículos 1509 y ss, llegó a la siguiente conclusión:

“En desarrollo del principio de seguridad jurídica, el ordenamiento civil colombiano adoptó el principio general del Derecho Romano según el cual la ignorancia del Derecho no sirve de excusa (iuris ignorantia non excusat), con la consecuencia de que el error de derecho perjudica (iuris error nocet). Así lo estableció en el Art. 9º del Código Civil, en virtud del cual “la ignorancia de las leyes no sirve de excusa” y en el Art. 1509 ibidem, una de las normas objeto de la demanda que se estudia, que dispone que “el error sobre un punto de derecho no vicia el consentimiento”. Esto último significa que el error de derecho no da lugar a la declaración judicial de nulidad del negocio jurídico y que, por tanto, la parte de éste que lo cometió debe asumir todas las consecuencias de su celebración”

En atención a lo ya expuesto, es claro que, tratándose de nulidad o ineficacia en la afiliación efectuada al RAIS, todo se traslada a lo establecido en la legislación civil en lo relacionado a la teoría del negocio jurídico, pues este trae como aspecto implícito e inherente de la acción, la voluntad de

	Certificación de la Secretaría Técnica del Comité de Conciliación y Defensa Judicial		CÓDIGO:	
			VERSIÓN:	
			FECHA:	

los contratantes, por lo que, atendiendo al extracto jurisprudencial en cita, se puede establecer que en el presente caso el demandante, debe asumir las cargas de la suscripción del contrato.

Adicional a lo anterior, se debe traer a colación lo manifestado en la sentencia STL – 10825 de 2017, rad. 47528, M.P. Jorge Luis Quiroz Alemán, en este entendido:

“En efecto, la tesis de que la declaración de nulidad de la afiliación por falta de cumplir con el deber de información por las AFP opera solo para las personas beneficiarias del régimen de transición pensional del artículo 36 de la ley 100 de 1993, ha sido acogida en las sentencias C-789 de 2008 y SU-130 de 2013 de la Corte Constitucional, y SL37174 de 2010 y 46380 de 2015, de esta Sala de Casación.”

Anudado a lo anterior dicha obligación de emitir por parte de las AFPS herramientas financieras o proyecciones pensionales a los potenciales afiliados nació con el Decreto 2071 de 2015, promulgada con posterioridad al traslado del demandante.


Además, el mencionado decreto 692 de 1994 en su artículo 2.6.10.4.3. Parágrafo 2 establece:

Parágrafo 2°. La proyección de que trata este artículo, proporcionada por la Administradora del Régimen de Ahorro individual con Solidaridad, a través de las herramientas financieras, deberá entenderse como un cálculo estimado de la eventual futura pensión. La Administradora deberá informar al afiliado que la mesada pensional resultante es una mera proyección y no un derecho consolidado, por fundamentarse en una simulación de supuestos futuros probables, pero sin certeza sobre la ocurrencia.

Así las cosas y como quiera que el monto pensional en el RAIS también depende de variables como el rendimiento financiero de los fondos sujetos al comportamiento fluctuante de la economía, incierto resulta establecer un posible monto que le permitiera en ese momento al demandante evaluar cuál sería a futuro el régimen más favorable, en esa medida, no se puede afirmar que el silencio de las AFP mencionadas, en estos aspectos constituyan falta en el deber de información.

Adicionalmente, respecto de los demás afiliados al SGP, es decir, quienes no son beneficiarios del régimen de transición, para efectos del traslado de régimen pensional, también se les aplica la regla anteriormente expuesta, contenida en el literal e) del artículo 13 de la Ley 100/93, conforme fue modificado por el artículo 2° de la Ley 797 de 2003, ambas normas interpretadas por la Corte, con efectos de cosa juzgada constitucional, en las Sentencias C-789 de 2002 y C1024 de 2004.

Así las cosas únicamente los afiliados con quince (15) años o más de servicios cotizados a 1° de abril de 1994, fecha en la cual entró en vigencia el Sistema General de Pensiones, pueden trasladarse “en cualquier tiempo” del régimen de ahorro individual con solidaridad al régimen de prima media con prestación definida, conservando los beneficios del régimen de transición» Beneficio que no ostenta la demandante en tanto a la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993 contaba con menos de 15 años de cotización.

	Certificación de la Secretaria Técnica del Comité de Conciliación y Defensa Judicial		CÓDIGO:	
			VERSIÓN:	
			FECHA:	

Por lo que no resulta procedente acceder a las pretensiones incoadas por LUIS EDUARDO MALDONADO MORENO, al no ser legal la declaratoria de ineficacia del traslado del RPM al RAIS efectuada en enero de 1995.

Finalmente debe tenerse en cuenta que en virtud del principio de la relatividad jurídica, COLPENSIONES es un tercero dentro del presente asunto y los actos jurídicos de traslado de régimen promovidos entre la AFP y la parte accionante tienen efectos inter partes, por lo tanto independientemente de la decisión adoptada por el juez de instancia, COLPENSIONES no puede ser favorecida ni perjudicada con la decisión adoptada, razón por la que resulta improcedente cualquier condena en detrimento de los intereses de mi representada.

Por lo anterior se sugiere NO proponer formula conciliatoria.

La presente certificación se emite en la ciudad de Bogotá a los 08 días del mes de mayo de 2023.



MARIA ISABEL CAMPO MARTINEZ
Secretaria Técnica de Comité de Conciliación y
Defensa Judicial de Colpensiones